

IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES DE LA MILITARIZACIÓN: HONDURAS EN EL CICLO DE UNA DEVASTACIÓN NEGADA

Paola Montserrat Sánchez Méndez*

When we declare war on a nation, we now also declare war on the earth, on the soil and plants and animals, the water and wind and people, in the most farreaching and deeply-infecting ways. War insinuates itself, like an aberrant gene, and, left unchecked, will eventually destroy the earth's entire system!

Barry Sanders

Resumen

En el presente artículo se analiza la vinculación entre las dimensiones bélica y ambiental a fin de dar visibilidad a los impactos socioambientales que resultan de los procesos de militarización en el contexto de crisis del sistema capitalista y del planeta Tierra. Para ello se examinan los efectos de los esquemas de exploración y explotación de recursos naturales y las implicaciones de la existencia de bases militares estadounidenses en sus vertientes de operativización. Se retoma el caso de Honduras para ilustrar un caso concreto del ciclo de devastación socioambiental que produce la actividad militar en países intervenidos.

Palabras clave: militarización, socio-ambiental, devastación, Honduras, impactos.

* Egresada de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Becaria CEIICH-CONACY en el Proyecto PAPIIT "Construcciones sociales alternativas ante los límites planetarios a la acumulación capitalista". Sus temas de interés son: militarización en Centroamérica y el Caribe, medio ambiente, seguridad y narcotráfico.

¹ "Cuando declaramos la guerra a una nación, también le declaramos la guerra a la tierra, al suelo, a las plantas, a los animales, al agua, al viento y a la gente, en las formas más extremas y profundamente infecciosas. La guerra se insinúa como un gen aberrante y, si no se controla, eventualmente destruirá todo el sistema de la Tierra" [Traducción propia].

Las circunstancias de la vida en el planeta se han visto profundamente modificadas en las últimas décadas como resultado del funcionamiento y la crisis actual de la formación social y económica capitalista en sus distintas configuraciones histórico-estructurales, mismas que han sido impulsadas o forzadas bélicamente a globalizarse a través de proyectos encaminados a la permanencia de la explotación, el despojo y la muerte. Tales proyectos, promovidos principalmente por Estados Unidos, han provocado efectos socio-ambientales devastadores que ponen en riesgo las condiciones de existencia de todo ser vivo en la Tierra.

En lo que se refiere a Centroamérica, históricamente ha sido configurada como una región clave de extracción y transporte de recursos naturales para la economía internacional y en especial para la economía estadounidense. Cada vez se han hecho más visibles en las últimas décadas las dimensiones de la militarización y de la destrucción ambiental,² por lo que esta región requiere ser comprendida más allá de la dimensión territorial de su ubicación geográfica y conectarla a su importancia geopolítica e histórica como parte de un "continuo geográfico, histórico y cultural en el que se observan patrones comunes" (Mantilla, 2011:41-42) y en el que se originaron disputas comerciales desde la época colonial, con proyectos como la construcción del Canal de Panamá en el siglo xx y el Proyecto Mesoamérica en el siglo xxi.

Esta importancia se ha reafirmado a la par de estrategias de intervencionismo militar por parte de Estados Unidos, principalmen-

² Si bien existen distinciones teóricas entre la dimensión climática, ecológica y ambiental, para efectos de este artículo se utiliza la ambiental por su capacidad de abarcar ámbitos generales.

Geopolítica



te. La estrategia de guerra del hegemón ha fungido históricamente como un pilar para su expansión económica, pero también en la actualidad como sostén de su papel ante la disputa con otras potencias y que se vincula directamente con su condición de decadencia hegemónica, misma que explica la implementación de proyectos de seguridad hemisférica que comenzaron desde las disputas coloniales por los accesos territoriales-comerciales hacia América Latina y el Caribe, profundizados durante el siglo xx.

Asimismo, en décadas recientes se han dado procesos que han implicado un aumento exacerbado del gasto militar mundial que en 2018 presentó un incremento del 2.6% con respecto a 2017, representando el 2.1% del PIB mundial, es decir, un aproximado de 239 dólares por persona según datos del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI, 2019:6). El 60% de estas cifras se concentra en países como Estados Unidos, China, Arabia Saudita, India y Francia. Este incremento ha tenido expresiones propias en Centroamérica y el Caribe, llegando al 8.8% (SIPRI, 2019:6).

El fin que persigue el presente artículo es analizar los impactos socio-ambientales que dichos procesos de militarización han originado, tomando el caso de Honduras como un país representativo de estas circunstancias. Para ello se examinan los objetivos que persiguen las estrategias de militarización en el control de recursos y territorios por parte de Estados Unidos y la operativización de estas actividades bélicas, expresadas en la instalación de bases militares, así como en la destrucción ambiental que provoca la puesta en marcha en sus distintas vertientes. El análisis enfatiza en la condición cíclica de una devastación negada, entendida como un proceso de destrucción socioambiental que se agrava continuamente a través de la retroalimentación de la guerra y los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales.

...aumento exacerbado del gasto militar mundial que en 2018 presentó un incremento del 2.6% con respecto a 2017...

Sentidos de la militarización

La militarización puede analizarse –según los planteamientos de Alejandro Pulido y Ana Esther Ceceña– como parte de procesos de control llevados a cabo a través de la participación de aparatos militares nacionales o extranjeros –como el ejército o la policía– en territorios, instituciones o formas de vida que resultan “clave por los intereses estratégicos” en un contexto determinado (Pulido, 2012).

En términos de lo que han significado los esquemas y procesos de la militarización para el mundo y América Latina, “hay una construcción de capas envolventes en las cuales se van abarcando diferentes dimensiones de establecimiento de relaciones de sometimiento” (Ceceña, 2011), es decir, la militarización se verá expresada con la presencia de instrumentos e instalaciones bélicas y cuerpos armados,

así como a través de marcos institucionales que den certeza jurídica a las actuaciones de quienes trabajan en y para el ejército, y también particularmente mediante el creciente número de armas clandestinas en algunos territorios. Por lo anterior es importante resaltar que la militarización también alcanza distintas formas a las variadas dimensiones de la vida cotidiana.

En Centroamérica y el Caribe, los escenarios de la militarización han sido parte fundamental de las construcciones y reestructuraciones históricas de los Estados-nación y sus respecti-

vos ejercicios de poder, internos y al exterior con otros Estados. Así, la presencia militar en estos países también se ha configurado a lo largo del tiempo como parte de las estrategias de dominación de países industrializados como Estados Unidos, en distintas épocas, propiciando la generación de procesos de *militarización del poder* (Rouquié, 1984:12) en lugares considerados estratégicos, debido a lo altamente funcionales que resultan ser sus recursos naturales o ubicaciones geográficas para garantizar la continuidad de mecanismos de explotación y despojo.

A finales del siglo xx, derivado de la crisis terminal del capitalismo, se desató en Estados Unidos un proceso de decadencia expresado en la pérdida de su capacidad de influencia global y regional que propició una serie de acciones, estrategias y pugnas imperialistas con otros países, entre ellos China. Con estas disputas, “el capitalismo de guerra neoliberal adquiere en la concepción y estrategia estadounidense una dimensión profundamente violenta y osada [...] ante la competencia de otras potencias que también disputarán los espacios de acumulación y reproducción del capital” (Rodríguez Rejas, 2017:9, 23).

En el caso de Centroamérica, la presencia imperial se ha reforzado militarmente de manera constante a través de diferentes mecanismos, tales como el gasto presupuestal creciente en términos de defensa y la construcción o ampliación de bases militares. Además, ha diversificado sus campos operativos y sus objetivos al consolidarse como parte de una estrategia derivada de medidas de (neo)liberalización comercial forzada, aplicadas desde la década de 1990 por instituciones de alcance internacional, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial (BM), que históricamente han respondido a los intereses de expansión económica y financiera de Estados Unidos (Palast, 2002).

A partir de la incorporación al análisis del indicador “carga militar” –que puede definirse como el “peso que tiene el gasto en Defensa en relación con la riqueza generada por cada país, medida en términos del Producto Interno Bruto (PIB)” (BBCMundo, 2018)–, Honduras destaca como un caso representativo de la región centroamericana. En efecto, el gasto en defensa del Estado hondureño se ha consolidado como uno de los más grandes desde 2011, con 1.7% de su PIB según datos del Banco Mundial, lo que equivale a un poco menos de la mitad de los dos países con mayor carga militar en el continen-

te: Colombia, donde se ha incrementado a 3.17%, y Estados Unidos donde ha descendido desde 2011 a 3.16%.

**...la
militarización
se verá
expresada con
la presencia de
instrumentos
e instalaciones
bélicas y
cuerpos
armados...**

El caso hondureño ilustra la situación de años recientes, donde “lo que cambió fue la tendencia al aumento del gasto por áreas del mundo, y son los países periféricos los que tienen una tendencia de crecimiento más rápida que los países centrales” (Rodríguez Rejas, 2017:42). Además, cabe destacar que Honduras se ha colocado también desde 2015 como uno de los países con menor gasto social en la región centroamericana (Saravia, 2019).

Todo esto ha representado la culminación de un proceso de promoción de “libre mercado” que inició desde 1988, año en que Honduras recibió del Banco Mundial los primeros préstamos de ajuste estructural, y que tuvo su aterrizaje institucional en la década de los noventa a través de la implementación de proyectos que promovieron los ejes discursivos de la modernización del Estado y la economía hondureños, pero que terminaron por incrementar las condiciones de desigualdad, la inflación y el descontento (Almeida, 2016:232-234), así como la degradación ambiental con una aceleración de las condiciones de exploración y explotación de recursos naturales. Al respecto, Ceceña señala que:

Las normatividades que se van estableciendo universalmente por la vía de los tratados económicos y de las negociaciones en organismos internacionales como la OMC, no propician la libertad sino la imposición; pero además se acompañan, cada vez más, de medidas de control militar y militarizado ahí donde el rechazo de la población se manifiesta de forma organizada y/o masiva (Ceceña, 2011).

Las medidas represivas representan formas exacerbadas de violencia y disciplinamiento dirigidas a la contrainsurgencia en territorios donde son llevadas a cabo actividades propias

de estas disputas imperialistas, por lo que han tenido efectos de carácter social tales como ocupación territorial, megaproyectos extractivos, bases militares y desplazamientos poblacionales, entre otros, que en su conjunto se abordan en el siguiente apartado.

La vinculación cíclica de la devastación bélico-ambiental

La participación de Estados Unidos en negociaciones internacionales sobre medio ambiente ha estado frecuentemente plagada de presiones para impedir la aplicación de estos marcos, a fin de evitar límites a sus actividades económicas-industriales y sobre todo a las del complejo militar industrial. Así, durante las negociaciones de 1997 del Protocolo de Kioto sobre Cambio Climático, los representantes estadounidenses ejercieron presión para exigir que las emisiones derivadas de combustibles para barcos de guerra y las operaciones militares en todo el mundo, quedaran inmunes a las limitaciones que suponía informar de sus emisiones de gases de efecto invernadero. Como se sabe, el Protocolo de Kioto no fue ratificado por Estados Unidos (Hynes, 2011).

Según investigaciones de Barry Sanders, se estima que el ejército de Estados Unidos es responsable de aproximadamente un 5% de las emisiones de gases de efecto invernadero que coadyuvan al calentamiento global (Sanders en Hynes, 2017), lo cual se explica por las variaciones del consumo de barriles de petróleo en diferentes periodos, que entre 2010 y 2015 alcanzaron un promedio de 102 millones de barriles al año (Crawford, 2019:9).

Los principales recursos usados en actividades militares son el diésel, la electricidad y el combustible para aviación (Crawford, 2019:5). Este último suele acarrear contaminación por dióxido de carbono (CO₂) mayores a las del diésel y el petróleo, sumado a los efectos radiactivos de los gases de escape de estos vehículos, tales como

el óxido nítrico, el dióxido de azufre, el hollín y el vapor de agua, que exacerban los efectos del CO₂ (Hynes, 2017). No obstante, estos niveles de degradación ambiental están fuera de cualquier marco institucional capaz de sancionarlos o regularlos.

Al respecto, es necesario destacar que en Estados Unidos este consumo es específico del Departamento de Defensa, que desde 2001 viene utilizando entre el 77% y el 80% del consumo total de energía del gobierno estadounidense, empleando incluso más energía que otros países industrializados como Suecia o Dinamarca (Crawford, 2019:2 y 4).

La responsabilidad ambiental se relaciona directamente con la presencia militar de Estados Unidos y sus múltiples bases militares en todo el mundo, mismas que alcanzan cerca de 800 a nivel global y al menos 76 conocidas en América Latina, “concentrándose la mayor cantidad en Centroamérica y el Caribe” (Capote Fernández, 2018). Las afectaciones sociales mencionadas en el apartado anterior, es necesario analizarlas a través de su dimensión ambiental y su vinculación con los objetivos y la operativización de las actividades militares de la industria de guerra estadounidense que ha dado lugar a la instalación de bases militares en países periféricos como Honduras, donde opera la Base Aérea Soto Cano. Estas forman parte de la profundización de esquemas de extracción de recursos naturales y sus correspondientes procesos de militarización de territorios, puntos clave para entender la magnitud cíclica de la devastación socioambiental.

El caso hondureño reviste especial importancia dado que su territorio ha sido ocupado desde la década los ochenta del siglo XX cuando se agravaron y complejizaron viejos procesos de desalojo de poblaciones de sus tierras para la instalación de bases que tenían como objetivo vigilar y coordinar acciones contrainsurgentes hacia Nicaragua. Tal desposesión se hizo permanente “a raíz de una serie de acuerdos que consolidaron la presencia de las bases

...Honduras se ha colocado también desde 2015 como uno de los países con menor gasto social...

y tropas estadounidenses” (Van der Zeijden e Irving, 2007). Cabe destacar que en esa época fue aprobada, por el Congreso de Estados Unidos de América, “la instalación de la base militar Soto Cano (Palmerola) antes de ser aprobada por el Congreso Nacional de Honduras” (Almendares, 2019:6).

A lo anterior se sumó más adelante la condición de vulnerabilidad ante riesgos climáticos de Honduras, que tiene sus fundamentos en las condiciones geográficas y de dependencia histórico-estructural que caracterizan al país, pero que también encuentra resonancias ante el recrudescimiento de la crisis ambiental del planeta Tierra, provocada en mayor medida por las élites de los países industrializados y caracterizada por la superación constante de lo que Malcolm Gladwell llama “puntos de inflexión”, definidos como momentos críticos, de ebullición y que una vez superados llevan a procesos difícilmente reversibles (Gladwell, 2000:9, 12), en este caso respecto al deterioro ambiental.

Cabe resaltar que el Índice de Riesgo Climático Global (IRC), elaborado por la ONG Germanwatch, ubica a Honduras como el segundo país más afectado por eventos climáticos extremos³ en el periodo que va de 1998 a 2017, por lo que su situación de vulnerabilidad ante riesgos climáticos –como pérdida de vidas o amenazas existenciales– tiene mayor posibilidad de impacto que en otros países de mayores ingresos.

Luego del golpe de Estado en Honduras en 2009, para remover al presidente Manuel Zelaya por su aplicación de medidas sociales, Estados Unidos impulsó y respaldó la imposición de un gobierno alineado a sus intereses extractivistas. Años más tarde se incrementó el número de concesiones mineras activas y pendientes (OXFAM, 2017:6) y disminuyeron las regulaciones para facilitar las actividades

...durante las negociaciones de 1997 del Protocolo de Kioto sobre Cambio Climático...

de un modelo extractivista (Trucchi, 2014). Para el año 2018 ya se habían otorgado 137 concesiones mineras (FOSDEH, 2019:5) de minerales como oro, plomo, zinc, plata, antimonio, ópalo, mercurio, hierro, petróleo, gas, yeso, cal y otros (Garay, 2014:9), y un poco más de 300 proyectos de generación de energía, representando en la actualidad un promedio del 35% del territorio nacional concesionado a corporaciones (Anfruns, 2016).

Estas concesiones han favorecido la devastación de los territorios donde se instalan, generando brechas abismales de desigualdad entre los sectores privados que se benefician de ello, y la población que sufre los efectos de la ruptura

del tejido social y la destrucción ambiental. Se observa entonces una vinculación directa con los procesos de militarización, pues al propiciarse el descontento de las poblaciones originarias y la protesta social por la recuperación de sus condiciones de vida, intervienen los sistemas de seguridad e inteligencia que, junto con las demás estructuras del Estado, criminalizan y catalogan el disenso como amenaza al Estado y como susceptible de ser eliminado. Fue lo que sucedió en 2016 con el asesinato de Berta Cáceres por su oposición al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

La justificación institucional que se utiliza para la instalación de cada vez más bases militares estadounidenses en territorios extranjeros implica la elaboración y publicación de informes sobre “los principales ‘peligros’ o ‘amenazas’ identificadas y el modo de enfrentarlas” (SouthCom, 2017) desde las capacidades de cada Estado, y a partir de la cooperación en materia de seguridad, pero sin vincularla a la responsabilidad ambiental por los efectos de la militarización.

Así, por ejemplo, en el documento *Theater Strategy*, formulado por el Comando Sur en abril de 2017, se propone la implementación de nuevos enfoques de la seguridad en distintas escalas y en aspectos como la lu-

³ Puerto Rico se ubica en el primer lugar y Myanmar en el tercero de la clasificación (Germanwatch, 2019:2-3).

cha contra el narcotráfico, la degradación de amenazas por parte de redes ilícitas transregionales y transnacionales, y una respuesta rápida a crisis tanto naturales como humanitarias (SouthCom, 2017:1-3).

Ante ello, resulta indispensable mencionar que la Base Aérea Soto Cano en Comayagua, Honduras, se posiciona como la sede del Comando Sur de Estados Unidos y como la base más grande instalada en Centroamérica (Martínez, 2012). Aun así, las cifras de asistencia a las fuerzas armadas hondureñas mantienen flujos constantes en el presupuesto antidrogas del Departamento de Defensa. Según Adam Isacson, “las cuentas antidrogas del Pentágono han cubierto la construcción de bases militares en Guanaja, Mocerón, El Aguacate y Puerto Castilla” (Isacson *et al.*, 2013:11).

En cuanto al aspecto socioambiental de la militarización, estudios como los de Wilbert van der Zeijden y Sarah Irving señalan que la construcción de bases militares da lugar a desplazamientos forzados de poblaciones, debido a la ocupación de amplios territorios que son arrebatados a sus habitantes, “a quienes no se les da otra salida que abandonar sus hogares y tierras de cultivo [...] Y una vez establecidas, las bases tienden a expandirse, con lo que cada vez consumen más espacio, y la degradación medioambiental hace que las zonas colindantes sean inhabitables” (Van der Zeijden e Irving, 2007). Además, según el seguimiento de consumo energético que realiza el Departamento de Defensa de Estados Unidos, el uso de energía del total de las instalaciones es de aproximadamente un 30% del consumo total del Pentágono, usada sobre todo para calentar, enfriar y proporcionar electricidad. La capacidad de operaciones y de proyección del poder estadounidense engloba más de 560,000 edificios en un aproximado de 500 instalaciones. Cada instalación emite gases de efecto invernadero no contabilizadas públicamente, no obstante, las estimaciones suelen hacerse a partir del edificio del Pentágono, que en 2013

emitió 24,620.55⁴ toneladas métricas de CO₂ (Crawford, 2019:6).

Estas estimaciones arrojan luz sobre el potencial de contaminación de las bases militares estadounidenses en países donde han desplegado sus instalaciones. No obstante, ser países intervenidos de diversas formas, aunado a las exenciones militares estadounidenses en los marcos internacionales, dificulta la implementación de mediciones exactas a la par de regulaciones ambientales sobre estas infraestructuras militares así como las actividades que ahí se realizan.

De igual manera, documentos como el *Theater Strategy* del Comando Sur, limitan las posibilidades de llevar a cabo inspecciones o controlar los marcos operativos de estas instalaciones, incluso con intenciones socioambientales. La influencia material e ideológica que se ejerce sobre la región, posibilita que tales tentativas de supervisión sean consideradas como premisas de amenaza a la seguridad nacional estadounidense.

Las diversas actividades realizadas en las bases militares han ocasionado la generación de desperdicios bélicos, mismos que han sido clasificados como *residuos peligrosos*. Estos se refieren a todos aquellos residuos de “hidrocarburos, disolventes y todo tipo de barnices o elementos residuales del manejo de municiones” (Palladino, 2013). Como ejemplo tenemos una base militar en Italia donde se encontró más de 10 toneladas de baterías de todo tipo, cientos

de kilogramos de ácidos inorgánicos, amoníaco, disolventes (casi 2 toneladas al año), hidrocarburos aromáticos, metales pesados como el cromo hexavalente, plomo, mercurio, pesticidas, herbicidas, aceites usados y otros tipos de sustancias tóxicas (Palladino, 2013).

Este tipo de desechos conlleva problemáticas para su gestión, pues debido a la imposibilidad para cuantificarse o supervisarse —sobre todo en

...instalación de bases militares en países periféricos como Honduras...

⁴ Según datos del investigador del Instituto Politécnico Nacional, Juan Carlos Jiménez, los aviones del aeropuerto de la Ciudad de México emiten 2 mil 833 toneladas de gases de efecto invernadero al año (Juárez, 2016), por lo que puede estimarse que el Pentágono emite casi 10 veces esas cifras.

países con regulaciones ambientales débiles o flexibles como en el caso hondureño— resulta sumamente difícil conocer y administrar sus cadenas logísticas de evacuación y últimos destinos, dando lugar a procesos de devastación ambiental imperceptibles y con un entorno favorable para ser negada desde la perspectiva estadounidense.

Las problemáticas en la dimensión ambiental se complejizan cuando se les añaden los efectos sociales producidos por la construcción de bases militares en tanto que se constituyen como proyectos de macroinfraestructura que requieren de grandes cantidades de recursos hídricos y naturales para su funcionamiento. Un ejemplo ilustrativo, con potencial para aplicarse al análisis de instalaciones en latitudes como Honduras, es el de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA por sus siglas en inglés), que en 2010 informó con referencia a la base militar de Guam, que la infraestructura del sistema hidráulico debía ser mejorada, pues en caso contrario las poblaciones aledañas experimentarían déficit de agua.

Entre otras actividades que forman parte de las operaciones militares se cuenta la producción, adquisición y uso de armas de fuego, que al ser abandonadas no sólo incrementan los riesgos de detonaciones automáticas, sino que sus procesos naturales de degradación contribuyen a la degradación del suelo, la contaminación del agua, la destrucción de especies, la disminución de la biodiversidad y el desequilibrio en la cadena alimenticia (CICR, 2012). En este sentido, es indispensable mencionar los fenómenos naturales y las catástrofes que propician, ya que tsunamis, terremotos, inundaciones y huracanes, agravan la vulnerabilidad de estas comunidades al esparcir los restos de municiones y armas. Esta situación resulta especialmente importante para Honduras por ser un país con una amplia línea de costa que lo hace susceptible a los huracanes que dicho sea de paso, en décadas recientes han incrementado su intensidad (Miller, 2019).

...Estados Unidos impulsó y respaldó la imposición de un gobierno alineado a sus intereses extractivistas...

Así, es posible observar la manera en que la industria bélica aísla la dimensión de lo socio-ambiental en lo relativo a la conservación de la vida en el planeta, incluyéndola sólo como intento de hacer guerras aparentemente amigables con el medio ambiente mejorando su eficiencia energética, reduciendo el consumo o virando hacia las energías renovables (CRS, 2019). No obstante, nada se dice acerca de la limitación de la producción de armas o de la frecuencia e intensidad de las guerras, pues de hacerlo se pondría fin a una parte esencial y orgánica que hace posible la supervivencia económica y política a nivel global de las élites corporativas y estatales.

Finalmente, esta organicidad se ilustra en el caso hondureño con la manera en que han sido enfrentados los movimientos de resistencia de las comunidades a proyectos mineros e hidroeléctricos por parte de las autoridades hondureñas quienes han adoptado medidas que permiten tipificar la defensa del medio ambiente como asociación ilícita, a partir de cambios normativos esbozados en el decreto 112-2017, “que puede enviar a imputados a tribunales militares y ser acusados por delitos de alta peligrosidad” (*Telesurtv*, 2019).

Consideraciones finales

La estructura socioeconómica capitalista continúa impulsando la exploración y explotación exacerbada de recursos naturales para la maximización de ganancias privadas como una medida de emergencia para recuperar las cifras de producción y consumo que se dieron durante la segunda mitad del siglo xx. Sin embargo, no obstante, no toma en consideración el factor de la finitud de los recursos en las exigencias desmedidas que se hacen al planeta Tierra.

Lo anterior ha provocado la fragmentación cada vez mayor del tejido social con potencial comunitario en todos los ámbitos y, con ello, la superación alarmante de los puntos de inflexión planetarios que conducen a estados de

irreversibilidad, mismos que menguan las capacidades de regeneración ecosistémica, produciendo un agravamiento de las disputas por recursos y territorios, consolidando así ciclos de devastación socioambiental que amenazan la vida en todas sus formas.

En este sentido, el dualismo entre ser humano y naturaleza ha impedido ver que históricamente todos los escenarios de guerra han sido sumamente complejos y que han causado afectaciones graves de carácter socio-ambiental. Esta situación ha complicado la preocupación sobre las cifras de desastre ambiental que las operaciones e instalaciones militares dejan a su paso y durante un largo tiempo han permitido que estas continúen contribuyendo de forma velada a los ciclos de devastación locales, regionales y mundiales.

En este sentido, vale la pena destacar las luchas de los pueblos originarios en la defensa de sus territorios. Entre éstas podemos mencionar los movimientos que se han gestado en Honduras que rompieron notoriamente con esa desconexión entre guerra y naturaleza y que representan una gran lección para todos los países con bases militares instaladas en sus territorios. Tal fue el caso de la manifestación liderada por la activista Berta Cáceres frente a la Base Aérea Soto Cano en 2011, que contó con la participación de aproximadamente 300 personas (Rosas, 2018).

Dicha protesta fue muy importante pues encaró los primeros esbozos de sensibilización sobre la guerra y las consignas de quienes padecen los efectos del belicismo a corto plazo, como la ofensiva directa de las armas y el uso de la fuerza –pero también a largo plazo y en todas las escalas, con la destrucción de la vida que estas operaciones dejan a su paso.

El mantenimiento de la escisión ser humano-naturaleza es muy importante para las élites que se benefician de ello, pues la violencia de la que se valen para silenciar voces como la de Berta Cáceres, ilustra la negación consciente que encubre la verdadera naturaleza de los proyectos supremacistas de un solo modelo civilizatorio que ha conducido a

una crisis humanitaria y a la devastación de entornos naturales.

Reunir las piezas de la escisión ser humano-naturaleza con la que nuestra cultura se ha conformado, implica derrumbar las ideas antropocéntricas de las afectaciones humanas de la guerra como las únicas existentes y dar inicio a nuevas relaciones con la naturaleza, que pasen necesariamente por percibirla no como un objeto inerte, tampoco como un sujeto a la par de los seres humanos, y sí como un sistema que ofrece diversas y complejas posibilidades de coexistencia entre los seres vivos y con ello mantener la perspectiva de que la crisis socioambiental contemporánea no es sólo una atmósfera que propaga amenazas, sino también un momento histórico en el que podemos propagar las alternativas solidarias.

Bibliografía

AGUON, Julian (2012), “El Departamento de Defensa de EE. UU: el mayor contaminador del planeta”, en *Red Voltaire*. Dirección URL: <<https://www.voltairenet.org/article175317.html>>.

ALMEIDA, Paul (2016), *Neoliberalismo y movimientos populares en Centroamérica*, El Salvador, UCA Editores.

ALMENDARES BONILLA, Juan (2019), “Golpe de Estado militar: resistencia y movilización frente a la guerra total contra el pueblo”, en *Alainet*. Dirección URL: <<https://www.alainet.org/es/articulo/200874>>.

ANFRUNS, Alexandre (2016), “Más del 35 por ciento del territorio hondureño se ha entregado a multinacionales: Berta Zúñiga y Copinh”, en *Desinformémonos*. Dirección URL: <<https://desinformemonos.org/mas-del-35-por-ciento-del-territorio-hondureno-se-ha-entregado-a-multinacionales-berta-Zúñiga-y-copinh/>>.

- BBC MUNDO (2018), “Cuáles son los 10 países del mundo que gastan una mayor parte de su riqueza en armamento”, en *BBC*. Dirección URL: <<https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-43984570>>.
- CAPOTE FERNÁNDEZ, Raúl (2018), “Bases militares de EE. UU. en América Latina y el Caribe. El Plan Suramérica”, en *Granma*. Dirección URL: <<http://www.granma.cu/mundo/2018-08-09/bases-militares-de-eeuu-en-america-latina-y-el-caribe-el-plan-suramerica-09-08-2018-17-08-04>>.
- CICR (2012), *Contaminación por armas. Devastación del medio ambiente y sufrimiento de la población*, Brasil. Dirección URL: <<https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/publications/t0110.pdf>>.
- CRAWFORD, Neta (2019), *Pentagon Fuel Use, Climate Change, and the Costs of War*, Estados Unidos, Watson Institute-Brown University. Dirección URL: <<https://mronline.org/wp-content/uploads/2019/10/Pentagon-20Fuel-20Use-2C20Climate-20Change-20and-20the-20Costs-20of-20War-20Final.pdf>>.
- DEMILITARIZE (2017), *The Enviromental Impacts of the U.S. Military*, Demilitarize. Dirección URL: <http://demilitarize.org/wp-content/uploads/2017/02/The_Militarys_Contribution_to_Climate_Change.pdf>.
- DINUCCI, Manlio (2017), “El verdadero impacto del pentágono italiano”, en *Red Voltaire*, Dirección URL: <<https://www.voltairenet.org/article198632.html>>.
- FOSDEH (2019), *Territorios en riesgo, el caso de la zona sur de Honduras*, FOSDEH. Dirección URL: <<http://www.fosdeh.com/2019/06/territorios-en-riesgo-ii-el-caso-de-la-zona-sur-de-honduras/>>.
- GARAY ZARRAGA, Ane (2014), *La minería transnacional en Centroamérica: lógicas regionales e impactos transfronterizos. El caso de la mina Cerro Blanco*, OMAL. Dirección URL: <http://omal.info/IMG/pdf/mineria_transnacional.pdf>.
- GLADWELL, Malcolm (2000), *The tipping point. How little things can make a big difference*, USA, Little, Brown and Company. Dirección URL: <https://binyaprak.com/images/blog_articles/123/the-tipping-point.pdf>.
- HYNES, Patricia (2011), “El ataque militar contra el clima global”, en *Rebelión*. Dirección URL: <<http://www.rebelion.org/noticia.php?id=135495>>.
- HYNES, Patricia (2014), “The ‘Invisible Casualty of War’: The Environmental Destruction of U.S. Militarism”, en *Different Takes*, núm. 84. Dirección URL: <<https://traprock.org/wp-content/uploads/2014/06/Militarism-and-the-Environment.pdf>>.
- HYNES, Patricia (2017), *War and Warming: Can we save the planet without taking on the Pentagon? Portside*. Dirección URL: <<https://portside.org/2017-01-28/war-and-warming-can-we-save-planet-without-taking-pentagon>>.
- ISACSON, Adam *et al.* (2013), “Tendencias en asistencia de seguridad de los EE. UU. hacia América Latina y el Caribe”, en *Hora de Escuchar*, CIP-LAWGEF-WOLA. Dirección URL: <<http://fileserv.idpc.net/library/WOLA-hora-de-escuchar-asistencia-us-latino-america.pdf>>.
- JUÁREZ, Blanca (2016), “Aviones generan más de un millón de toneladas de CO₂ al año en la ZMVM”, en *La Jornada*. Dirección URL: <<https://www.jornada.com.mx/2016/09/04/sociedad/030n2soc>>.

- MANTILLA, Silvia (2011), “Narcotráfico, violencia y crisis social en el Caribe insular colombiano: El caso de la isla de San Andrés en el contexto del Gran Caribe”, en *Estudios Políticos*, México, UNAM, núm. 38.
- MARTÍNEZ ZERPA, Braulio (2012), “Inventario de las bases militares de EE. UU. en América Latina y el Caribe”, en *Alainet*. Dirección URL: <<https://www.alainet.org/es/active/53971>>.
- MCSWEENEY, Kendra (2015), *El Impacto de las Políticas de Drogas en el Medio Ambiente*, Open Society Foundations. Dirección URL: <<https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/impact-drug-policy-environment-sp-20160928.pdf>>.
- MILLER, Brandon (2019), “Climate change makes storms like Dorian more dangerous”, en *CNN*. Dirección URL: <<https://edition.cnn.com/2019/09/03/weather/climate-change-effects-on-hurricanes/index.html>>.
- PALAST, Greg (2002), “El globalizador que desertó”, en *GregPalast*. Dirección URL: <<https://www.gregpalast.com/el-globalizador-que-deserto/>>.
- PALLADINO, Andrea (2013), “Las bases estadounidenses contaminan Italia”, en *Red Voltaire*. Dirección URL: <<https://www.voltairenet.org/article181269.html>>.
- PALMA HERRERA, José Luis *et al.* (2017), *Territorios en riesgo. Minería, tierra y agua en Honduras*, OXFAM-UNAH. Dirección URL: <https://cng-cdn.oxfam.org/honduras.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/Territorios%20en%20Riesgo%20-%20Miner%C3%ADa,%20tierra%20y%20agua%20en%20Honduras.pdf>.
- PULIDO, Alejandro (2018), “Militarización”, en *Omal*. Dirección URL: <<http://omal.info/spip.php?article4834>>.
- RODRÍGUEZ REJAS, María José (2017), *La norteamericanización de la seguridad en América Latina*, México, AKAL.
- ROSAS, María (2018), “Hondureños protestan contra ocupación estadounidense en base militar Palmerola”, en *La izquierda diario*. Dirección URL: <<https://www.laizquierdadiario.com/Hondurenos-protestan-contr-ocupacion-estadounidense-en-base-militar-Palmerola>>.
- ROUQUIÉ, Alain (1984), *El Estado Militar en América Latina*, México, Siglo XXI Editores.
- SANDERS, Barry (2011), “The Green Zone: The Worst Lie of All”, en *Huffpost*. Dirección URL: <https://www.huffpost.com/entry/the-green-zone-the-worst-_b_70173?guccounter=1>.
- SARAVIA, Francisco (2019), *Honduras: entre un ascendente gasto militar y un gasto social en picada. Una mirada comparativa con otros países de la región*, CESPAD. Dirección URL: <<https://cespad.org/hn/2019/02/13/honduras-entre-un-ascendente-gasto-militar-y-un-gasto-social-en-picada-una-mirada-comparativa-con-otros-paises-de-la-region/>>.
- SIPRI (2019), *SIPRI Yearbook 2019. Armaments, disarmament and international security. Summary*, SIPRI. Dirección URL: <https://www.sipri.org/sites/default/files/2019-08/yb19_summary_eng_1.pdf>.
- SMITH, Gar (2016), “The Pentagon’s Hidden Contribution to Climate Change”, *Earth Island Journal*. Dirección URL: <<http://www.earthisland.org/journal/index.php/articles/entry/>>

the_pentagons_hidden_impact_on_climate_change/>.

SOUTHCOM(2017), *Theater Strategy*, Southcom. Dirección URL: <[https://www.southcom.mil/Portals/7/Documents/USSOUTHCOM_Theater_Strategy_Spanish_\(FINAL\).pdf?ver=2017-10-26-124307-193×tamp=1509036213302](https://www.southcom.mil/Portals/7/Documents/USSOUTHCOM_Theater_Strategy_Spanish_(FINAL).pdf?ver=2017-10-26-124307-193×tamp=1509036213302)>.

TELESURTV (2019), “Honduras: aprueban reformas contra defensores del medio ambiente”, en *TELESURTV*. Dirección URL: <<https://www.youtube.com/watch?v=LA7q1C83q4Y>>.

TIAN, Nan *et al.* (2019), *Trends in world military expenditure, 2018*, SIPRI. Dirección URL: <https://www.sipri.org/sites/default/files/2019-04/fs_1904_milex_2018_0.pdf>.

TRUCCHI, Giorgio (2014), *Crecimiento de la industria minera en Centroamérica produce mitos, paradojas y realidades trágicas*, MovimientoM4. Dirección URL: <<https://movimientom4.org/2014/09/crecimiento-de-la-industria-minera-en-centroamerica-produce-mitos-paradojas-y-realidades-tragicas/>>.

Van der zeijden, Wilbert y Sarah irving (2007), “Las bases extranjeras en el mundo: Los tentáculos del imperio”, en *América Latina en Movimiento*. Dirección url: <<https://www.alainet.org/es/active/16122>>.